

Transición y consolidación de la democracia en México

Por: Juan Monroy García
Profesor de tiempo completo de la Facultad
de Humanidades de la UAEM, miembro del
cuerpo académico Desarrollo y democracia
en América Latina

La democracia tiene una larga tradición que data de 2 500 años, cobrando recientemente singular importancia, hecho que tiene varias causas, entre las que destacan cuatro. La primera consiste en que dicho concepto se ha mantenido a través de largas luchas históricas, como la posibilidad, la esperanza y el anhelo de la sociedad civil por controlar el poder despótico y la corrupción en el ejercicio del mismo.

Un segundo aspecto que ha permitido a la democracia cobrar actualidad, radica en que, después de varias décadas de lucha en Latinoamérica, las oligarquías han iniciado un proceso de negociación con la oposición, con el fin de lograr cierta estabilidad social; como ejemplos está lo sucedido en países como Guatemala, El Salvador, Brasil, Argentina, y Uruguay; además de que cabe señalar como casos especiales lo acontecido en Chile y Nicaragua. En el primer país, Pinochet tuvo un error de cálculo político en los resultados del referéndum, mientras que en el caso de Nicaragua, la transición a la democracia es producto del triunfo de las tácticas de los Estados Unidos y los errores sandinistas.

Una tercera fuente proviene del derrumbe del llamado “socialismo realmente existente” en Europa del Este y en la URSS durante el periodo 1989-1991; regímenes dentro de los que se manifestó la falta de democracia genuina, la cual hubiera permitido un proceso de autocríticas y autorreformas del sistema.

Finalmente, una cuarta causa es originada por la manipulación ideológica efectuada por parte del capitalismo, basada en varias falacias, entre las que podemos señalar: a) que sólo existe una democracia, que es la formal o “sin adjetivos”, b) que existe una relación

necesaria entre democracia y economía capitalista, c) que el pensamiento crítico es totalitario, d) que las estrategias y acciones de las grandes potencias en todas partes del mundo buscan establecer los valores de la democracia.

Transición a la democracia, una teoría

A partir de los cambios democráticos suscitados en América Latina y en el mundo, surgieron diversos intentos por explicarlos, siendo una de las teorías más exitosas la “Teoría de la Transición a la Democracia”, elaborada por profesores de diversas universidades de los Estados Unidos y de algunos otros centros de investigación, como el Centro Woodrow Wilson, creado en 1968 por el Congreso. Entre estos teóricos destacan autores como Samuel P. Huntington, (ex asesor del Departamento de Estado), Guillermo O’Donell, Philippe C. Schmitter, y Laurence Whitehead. Dicha teoría hace hincapié en el aspecto político, dejando de lado los temas de democracia social y democracia económica; habla de democracia pero en lo individual. A partir de esta teoría han surgido nuevos conceptos, como: *transición*, *liberalización*, *democratización*, e *incertidumbre*. Por *transición* se entiende el conjunto de transformaciones que modifican un gobierno autoritario, para dar paso a otro tipo de régimen. “Las transiciones están delimitadas, de un lado, por el inicio del proceso de disolución del régimen autoritario, y del otro, por el establecimiento de alguna forma de democracia, el retorno a algún tipo de régimen autoritario o el surgimiento de una alternativa revolucionaria. Lo característico de la transición es que en su transcurso las reglas del juego político no están definidas”¹. El inicio de la transición esta claro, pero el desenlace que tendrán los acontecimientos es incierto.

¹ O’Donell, Guillermo y Philippe C. Schmitter (compiladores), *Transiciones desde un gobierno autoritario*, volumen 4, Paidós, Barcelona, 1994. P. 19.

Por su parte, *liberalización* significa apertura del régimen autoritario a nuevos canales de participación social, donde se permiten mayores libertades sociales e individuales, el gobierno despótico cede en diversos aspectos, atenuando su censura hacia los medios de comunicación, permitiendo también otros espacios de expresión para la sociedad civil, e incluso liberando a algunos presos políticos.

Otra categoría es *democratización*, entendida como proceso mediante el cual se reemplaza un gobierno autoritario y no electo, por otro que es producto de elecciones limpias, libres y abiertas. Finalmente, la *incertidumbre* consiste en no saber el desarrollo que tomarán los acontecimientos (como ya lo habíamos comentado antes), y en consecuencia, el desenlace de los mismos: la democracia institucionaliza la incertidumbre.

Algunos autores² indican que existen diversos factores que inciden para que los regímenes autoritarios pierdan consenso y hegemonía, entre éstos se señalan: 1) Cuando el régimen autoritario ha satisfecho las razones que llevaron a su establecimiento, deja de ser necesario, y se produce su derrumbe. 2) El régimen autoritario pierde legitimidad (apoyo, aceptación y consenso), y se desintegra. 3) Existen conflictos dentro del bloque gobernante, que no pueden conciliarse internamente, ante lo cual ciertas fracciones deciden solicitar el apoyo de grupos ajenos al gobierno. 4) Presiones externas impulsan al régimen autoritario a hacer transacciones y cambios con tintes más democráticos.

La ambigüedad del término ha permitido que en nombre de la democracia se justifiquen diversas prácticas políticas, incluso las más autoritarias. Actualmente, la democracia enfrenta fuertes críticas que cuestionan sus fundamentos teórico-filosóficos, así como su concreción histórica. Sin embargo, existen algunos elementos mínimos necesarios de la democracia política, donde se afirma que la democracia moderna es sobre todo procedimental. En ese sentido Norberto Bobbio la define “como aquel régimen que

permite tomar decisiones con el máximo de consenso de los ciudadanos, fundado sobre los principios de libertad, de modo que los ciudadanos puedan elegir a sus gobernantes y al mismo tiempo, fundado sobre el principio del Estado de Derecho, que es lo que obliga a los gobernantes a no exorbitar su poder, y a ejercerlo en el ámbito de un sistema de normas estrictas”³.

Por otra parte, la democracia implica tomar decisiones acordes con la opinión de la mayoría, pero respetando el punto de vista de las minorías; tratando de lograr el consenso, mas sin cancelar el disenso. Un régimen democrático posee como norma suprema la garantía de las libertades políticas y civiles; asimismo el resguardo de los valores de la democracia tales como: la libertad, la igualdad, el pluralismo, y la tolerancia. Uno de los procedimientos principales de la democracia política son las elecciones, que tienen como características la limpieza, la honestidad y una estricta periodicidad, donde son permitidas la competencia y la participación en forma equitativa; logrando en el corto tiempo la alternancia en el poder.

Hasta ahora, los estudios sobre las transiciones a la democracia están apegados a un modelo de democracia que responde a las características de los países desarrollados, cuyo sustento teórico es el liberalismo clásico, donde el ciudadano es valorado en la medida que representa un voto en lo individual, de tal manera que desde esta perspectiva la comunidad y la colectividad pierden vigencia; asunto que entra en franca contradicción con tan importantes tradiciones de las sociedades latinoamericanas, donde la comunidad y lo colectivo son categorías que responden a una añeja tradición que se remonta a la época prehispánica. La teoría de la transición a la democracia es, al final de cuentas, una ideología más, con las implicaciones que esto conlleva, como la de ser un encubrimiento de la realidad.

² Cfr. Przeworski, Adam, *Transiciones desde un gobierno autoritario*, volumen 3, *Op. cit.* P. 84.

³ Bobbio, Norberto, *El futuro de la democracia*, FCE, México, 1993, p. 38.

Factores que impiden la consolidación de la democracia

La democracia es un proceso mediante el cual la incertidumbre se institucionaliza, al mismo tiempo que los actores políticos relevantes logran la legitimación de las estructuras, instituciones y procedimientos democráticos, siendo dichos actores capaces de mediatizar las demandas de la sociedad civil. No obstante, existen múltiples factores que impiden la consolidación de la democracia, entre los cuales podemos destacar:

1. Las negociaciones entre o al interior de las élites políticas, que sin duda favorecen los inicios de los procesos democratizadores, pero que también representan un obstáculo a mediano y largo plazo para su consolidación.
2. La existencia de una cultura política de exclusión, que va en contra de un principio democrático fundamental de inclusión.
3. Las instituciones clásicas de la sociedad, como la familia o la escuela, tienden a reproducir esquemas autoritarios, son instituciones que no están formando ciudadanos para la democracia.
4. Procesos electorales que no han logrado la equidad, la igualdad entre los partidos políticos ni la imparcialidad y honestidad de los órganos electorales que les darían confiabilidad ante los ciudadanos.
5. Una cultura política presidencialista, donde el poder del ejecutivo es sumamente amplio, en detrimento de los otros poderes.
6. Funcionamiento deficiente de los partidos políticos, dirigidos por oligarquías que deciden las candidaturas sin consultar a sus bases, cuyas actividades fundamentales se realizan durante los tiempos electorales, predominando las prácticas clientelistas.
7. Crisis económica con altos índices de desempleo y pobreza, donde se incrementan las grandes diferencias socioeconómicas en la población.

Los procesos electorales

En México, la estructura de poder autoritario se mantuvo hasta la década de los noventa, junto con una aparente democracia política; no obstante, desde 1977 iniciaron las reformas políticas, como producto de los movimientos sociales y bajo el marco de una profunda crisis económica. La primera de éstas propuso una nueva relación de los partidos políticos con el Estado, a partir de entonces, las distintas reformas han permitido a lo largo del tiempo la ciudadanización de los procesos electorales y en consecuencia la pérdida de poder de la estructura tradicional.

Pese a estas reformas, siguen subsistiendo formas autoritarias y elementos que impiden la consolidación de la democracia, lo cual ha quedado de manifiesto en los procesos electorales, y se expresa desde el momento en que los partidos políticos seleccionan a sus candidatos. Como ejemplo señalaremos las prácticas de los tres principales partidos del país, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) escogió a sus candidatos a través de un proceso que denominó “consulta a la base”, una forma poco clara, que incurre en irregularidades, sobre todo en el momento de interpretar los resultados, lo que provoca protestas de parte de los precandidatos perdedores, quienes califican el proceso de poco limpio y diseñado para favorecer a determinados personajes vinculados con los grupos de poder político o económico, y ligados a la cúpula del partido; las inconformidades de los precandidatos perdedores han provocado renunciaciones y divisiones al interior del partido; los ciudadanos consultados actúan regularmente bajo la consigna de votar por determinado candidato, de tal manera que éste compra los votos a través de dádivas, con la seguridad de que obtendrá beneficios posteriores. Hay que señalar que los gastos de las precampañas se realizan sin control, y por lo tanto las fuentes de financiamiento

pueden ser diversas, los organismos electorales están impedidos por ley para regular este tipo de gastos.

Por otra parte, el Partido Acción Nacional (PAN) efectúa la selección de sus candidatos desde la cúpula, sin tomar en cuenta la opinión de la ciudadanía, desde la dirección del partido se decide quiénes son sus candidatos.

Dentro del Partido de la Revolución Democrática (PRD) existe un proceso de selección interna en el que participan sus militantes, pero que frecuentemente incurre en irregularidades y antiguos vicios del sistema político —donde el PRI, como partido único, perfeccionó un sistema de fraude electoral—. El PRD sigue arrastrando esos viejos lastres que empañan el interés democrático de sus militantes por participar en la selección de sus candidatos.

A los partidos políticos en México les preocupa vender la imagen de sus candidatos, como consecuencia contratan los servicios de empresas de publicidad y venta de imagen, comprando tiempo y espacio en los medios de comunicación (radio, prensa, y televisión), este derroche publicitario representa una derrama económica importante para las empresas de publicidad, pero sobre todo, para los medios de comunicación. Lo que menos preocupa a los candidatos es acercarse a la ciudadanía para saber sus necesidades, u ofrecer soluciones viables que resuelvan los problemas económicos, sociales y políticos de la comunidad, las campañas políticas no dan argumentos convincentes a los posibles electores, la mayoría de los candidatos desconoce los problemas de la sociedad, les preocupa más saturar con su imagen los espacios públicos y los medios de comunicación, empleando frases rimbombantes, pero vacías.

Como ejemplo tenemos las elecciones federales de 2000, donde los 11 partidos políticos participantes gastaron alrededor de 3 433 millones de pesos; de los cuales aproximadamente 530 millones de pesos fueron destinados para sueldos de personal

eventual, arrendamiento de bienes muebles e inmuebles, transporte de material, de personal, así como para viáticos; otros 500 millones fueron destinados para pintas de bardas, mantas, volantes, pancartas, y equipo de sonido. Pero sin duda la erogación más significativa fue el gasto en medios de comunicación (radio, televisión y prensa escrita), cuyo monto asciende a más de 1 200 millones de pesos; de los cuales más de 56% se destinaron a la televisión; 35.7% a la radio; y 0.3% a la prensa escrita.

Haciendo un análisis de los gastos en medios de comunicación por partido, el PRI fue el que más gastó en spots de radio y televisión, con un monto de 98 mil millones de pesos. Para las elecciones de julio de 2003, los partidos políticos recibieron 5 200 millones de pesos. Cabe aclarar que en las elecciones de 2000 el abstencionismo fue menor al registrado en julio de 2003, en donde el PAN obtuvo 8 millones 303 mil 417 sufragios; el PRI, 6 millones 258 mil 270 votos; el PRD, 4 millones 747 mil 367 votos; el PT, 645 mil 45; PVEM, un millón 81 mil 750; Convergencia, 608 mil 581; PSN, 72 mil 752; Alianza Social, 199 mil 290; México Posible, 244 mil 504; y el PLM, 109 mil 404.

La elecciones en el Estado de México

Un ejemplo de ese derroche económico lo constituyen los recursos entregados a los partidos políticos (PAN, PRI, PRD, PT y PVEM) que participaron en las elecciones del 9 de marzo de 2003 en el Estado de México, recursos que ascendieron a 135 millones de pesos. Estos gastos son un insulto a la pobreza que sufre más de la mitad de la población de la entidad. Las elecciones en México suelen ser tan costosas, que no tienen comparación con los gastos de los procesos electorales de los países desarrollados.

Los resultados del 9 de marzo en el Estado de México se caracterizaron por el alto índice de abstencionismo, fenómeno que afectó de manera directa a las tres fuerzas políticas más importantes de la entidad, convirtiéndose en presagio para lo acontecido el

6 de julio de 2003 con motivo de las elecciones federales, cuyos resultados en la entidad indican que el PAN perdió un millón de votos, mientras que el PRI medio millón y el PRD 200 mil votos; las cifras totales de estos partidos fueron: Alianza Para Todos (PRI-PVEM) 1 050 000 votos; PAN 888 000 votos; y PRD 730 000 votos.

No obstante tan significativas mermas en la votación de estas tres fuerzas políticas, los fracasos electorales quedan matizados si se transforman los votos en porcentajes; aunque para el PAN fue un duro golpe, porque fue desplazado por el PRI como primera fuerza política en la entidad, sus pérdidas fueron de poco menos de diez puntos porcentuales, de 38% que obtuvo en 2000, solamente le quedó 28.67%; mientras que el PRI aumentó de 33 a 34.82%; aunque cabe aclarar que en la elección de 2000 se presentó solo, mientras que en la de 2003 lo hizo en alianza con el PVEM; finalmente, el PRD pasó de 20 a 22.75%. De acuerdo con los resultados del 9 de marzo, a la Alianza PRI-PVEM le correspondieron 28 diputados (24 para el PRI y 4 para el PVEM), 23 al PAN, 19 al PRD, 3 al PT y 2 a Convergencia por la Democracia. En cuanto a los Ayuntamientos, el reparto entre las tres fuerzas políticas más importantes fue el siguiente: Alianza PRI-PVEM 72 municipios, PAN 29 municipios; y PRD 21 municipios.

Tomando en cuenta estos resultados, podemos inferir que el abstencionismo tan elevado (58%) tuvo varias causas, entre las que podemos mencionar que las campañas políticas fueron más de ataques entre los propios partidos políticos y sus candidatos, quienes prefirieron desprestigiar a sus adversarios, antes que proponer ideas y proyectos en beneficio de la sociedad, en especial hay que destacar las pugnas entre PRI y PAN a través de los medios de comunicación, asimismo mencionar que hubo una sistemática destrucción de la propaganda entre los partidos; este tipo de actitudes generó el desinterés de los electores. Por lo general, las propuestas de campaña fueron poco

atractivas para la ciudadanía, las plataformas de campaña iban más en el sentido de lo fantástico, y como consecuencia fueron poco convincentes para la sociedad.

Cabe señalar que existió una intervención directa de parte del Gobierno de la entidad, aportando recursos materiales, humanos, y financieros para apuntalar las campañas del PRI, como en los viejos tiempos, donde era una práctica común; también el PAN contó con la ayuda del Gobierno Federal.

Pese a irregularidades como la compra de voto en especie o en efectivo, los acarreos, las amenazas, el robo de urnas y otras artimañas usadas por los partidos políticos, los votantes que acudieron a las urnas demostraron gran madurez, conscientes de que mediante el poder del voto expresaban sus preferencias políticas, y determinaban el rumbo de su municipio o del poder legislativo, este hecho ha permitido que existan gobiernos de diferentes signos políticos, lográndose la alternancia en el poder, característica propia de la democracia contemporánea; el ciudadano ha tomando conciencia del poder que representa el voto, dándose como consecuencia que aquellas agrupaciones políticas que no responden a las expectativas de los electores son cambiadas por otras que el ciudadano considera más adecuadas. Estos resultados también expresan que la mayoría de votantes que acudieron a las urnas lo hicieron conscientes y sabedores de que la construcción de la democracia en el país es un proceso irreversible, que cada vez sepulta más las prácticas del antiguo régimen autoritario.

Cabe señalar que falta arraigar en la cultura política de la ciudadanía otros principios democráticos, como la revocación del mandato; aplicable a todos aquellos servidores públicos electos que no cumplen adecuadamente sus funciones: no es necesario esperar que se cumpla el periodo para el cual fueron electos, es preciso que la sociedad pueda, en el momento dado, observar y valorar el desempeño de sus gobernantes, si su

desempeño es inadecuado debe ser posible revocarles el mandato, nombrando a mejores representantes a través de nuevos comicios.

Las elecciones de julio de 2003

Siguiendo con el tema del derroche de los recursos financieros, señalamos ahora el caso del Instituto Federal Electoral (IFE), cuyo presupuesto para el año 2003 fue de 11 mil millones de pesos. En el caso específico de la elección del 6 de julio, la erogación fue equivalente a 80 pesos por cada uno de los electores inscritos en el padrón, pero debido a que sólo votaron 26 millones 968 mil 317 ciudadanos (41.68%), frente a los 37 millones, 742 mil 225 que se abstuvieron (58.32%), el costo de cada voto se incrementó a 200 pesos, lo que significó un gasto inadmisiblemente y lesivo. Si tomamos en cuenta que en el país existen más de 53 millones de pobres; en el extremo contrario a esta sociedad empobrecida se encuentran los partidos políticos, cuyos gastos y opulencia contrastan con el desempleo y la pobreza extrema; estos hechos explican en parte el rechazo de los electores a los partidos, y el incremento del abstencionismo en los procesos electorales.

Por otra parte, de los 300 distritos de mayoría que estuvieron en disputa el 6 de julio, el PRI ganó 160; el PAN, 82; el PRD, 55; y el PVEM, 3. Traducidos en porcentajes, los partidos políticos y las coaliciones obtuvieron los siguientes resultados: PAN, 31.88%; PRI, 36.96%, (24.03 como partido, más 12.93% de su coalición con el PVEM); PRD, 18.23%; PT, 2.48; PVEM, 6.5%, (4.15%, como partido, más 2.35% de su coalición con el PRI); Convergencia, 2.34%. Sumando los diputados de representación proporcional, a los partidos políticos les corresponden las siguientes curules: PRI, 224; PAN, 153; PRD, 95; PVEM, 17; PT, 6; y 5 a Convergencia.

El partido que perdió en las elecciones del 6 de julio de 2003 fue sin duda Acción Nacional; la ciudadanía realizó un balance de tres años de gobierno de este partido,

incluida su actuación dentro del gobierno federal. Hay que señalar que el alto abstencionismo fue también la nota importante, por ello Soledad Loaeza, investigadora del Colegio de México, señaló que: “es muy probable que muchos de los que apoyaron a Fox en el 2000 hayan preferido abstenerse que votar en contra. Es como un último gesto de cortesía”⁴. El PAN fue juzgado por los ciudadanos como partido gobernante, también hay que señalar que estuvo en el ánimo de los votantes el rechazo a las propuestas del gobierno en materia energética, fiscal y laboral. El PAN tomó estas elecciones como un plebiscito del gobierno foxista, trató de aprovechar para su campaña la popularidad del Presidente Vicente Fox, empleando frases como “quítale el freno al cambio”, “juntos hacemos el cambio” o “elige bien”, donde se destacaban los logros presidenciales; Acción Nacional insistió en que los partidos de oposición eran un obstáculo para lograr los cambios esperados por los mexicanos. El PAN apostó al voto de castigo en contra del PRI y el PRD, pensó que acusándolos de causar ingobernabilidad, los electores se encargarían de concluir la obra.

Las elecciones del 6 de julio de 2003 también evidenciaron que los gobernadores de los estados son un poder autónomo, independiente y fuerte económicamente; en especial los del PRI, impusieron su ley y sus candidatos, mostrando que son una fuerza que tendrá que tomarse en cuenta en las decisiones del ejecutivo federal. Los gobernadores del PRI rápidamente ocuparon el espacio de poder dejado por el presidencialismo dentro del partido, de tal forma que impusieron sus candidatos a diputados federales, creando compromisos de obediencia, de tal manera que pueden influir fácilmente para que voten a favor o en contra de determinadas iniciativas, muestra de que tratan de construir nuevos cotos de poder. El PRI inició su campaña pensando en sus militantes y aquellos electores convencidos, por ello empleó diversos eslóganes que recordaban el pasado,

⁴ *Proceso*, semanario, No. 1393, 13 de julio de 2003, p. 7.

cuando el gobierno de este partido ofrecía trabajo y servicios. En un segundo momento quiso conseguir el voto de los indecisos, usando como estrategia los ataques al gobierno federal panista y al del Distrito Federal perredista, reclamándoles el no haber logrado abatir los índices de desempleo e inseguridad. Este partido afirmaba “el PRI está de tu lado”, y trataba de destacar su experiencia para gobernar. En los estados donde el PRI gobierna se emplearon recursos públicos para las campañas, y se incentivó la compra del voto. Pese a mostrar una aparente unidad y un entusiasmo desmedido, este partido sigue mostrando sus pugnas internas, que afloran en cuanto se disputan posiciones para la futura campaña presidencial. Con apenas 15% de la lista electoral, el PRI se adueñó de 45% de la Cámara de Diputados.

De estas elecciones también podemos inferir que las disputas internas del PRD provocaron reveses muy fuertes en sus resultados electorales en algunos estados, donde cayó hasta el cuarto o quinto lugar, como sucedió en los casos de Quintana Roo, Baja California Norte, Campeche, Coahuila, Durango, Jalisco y Nuevo León. A este revés, hay que añadir que en 20 estados el PRD no pudo superar los 13 puntos; obtuvo los peores porcentajes de la votación en Nuevo León, apenas 2.11%, en Campeche 2.47%, en Durango 4.09%, en Yucatán 5.29%, y en Coahuila 6.03%. Pero los resultados adversos de este partido tienen algunos antecedentes entre los años de 1997 y 2003, donde el PRD perdió alrededor de 3 millones de votos. Este revés perredista provocó que Juan Guerra, responsable de acción electoral, expresara que “hay militantes que piensan que como se la han partido por el PRD tienen derecho a destrozar al partido si no son candidatos, y si seguimos con esas actitudes fundamentalistas nuestros números a la baja serán en más de 20 estados”⁵. Por otra parte, otro dirigente del partido, Ramón Sosamontes, refiriéndose a las luchas internas entre las corrientes y su participación en los procesos electorales, ha mencionado: “son grupos de presión a los que no les

importó mucho si los candidatos podían atraer votos, sino simplemente cubrir las cuotas que les correspondían”⁶.

Por su parte, el dirigente Jesús Ortega, de la corriente Nueva Izquierda, indicó que si bien es meritorio haber duplicado el número de diputados federales, es también preocupante que el partido no esté colocado homogéneamente en la República; y agregó que el problema fundamental radica en la línea política y el programa tan genérico: “seguimos teniendo un programa muy genérico y tremendamente ideologizado, cuando lo que la gente quiere son respuestas concretas a la problemática nacional. Lo más importante es definir cómo cambiamos adecuar [sic] al PRD a las nuevas circunstancias del país, cómo le hacemos para incidir en las clases medias urbanas, por ejemplo”⁷.

Al interior del PRD se desató una fuerte polémica sobre las causas de la pérdida de credibilidad del partido ante la ciudadanía, por un lado se menciona la existencia de las corrientes al interior del partido, y por el otro, las inconsistencias de la línea política, así como del programa. Como parte de estas pugnas internas, la presidenta del partido, Rosario Robles, se vio obligada a renunciar. Este partido basó su campaña en hacer ver que el PRI y el PAN eran iguales, al haber aumentado el impuesto al valor agregado y apoyado el millonario (inútil y oneroso) rescate bancario.

El conservadurismo de la alta jerarquía católica se puso de manifiesto en el pasado proceso electoral. Las opiniones que más destacaron fueron las de los obispos de Querétaro, Acapulco, Tlaxcala y Cuernavaca, quienes en un primer momento mencionaron que los candidatos debían ser personas “bien preparadas” y llamaron a evitar el “oportunismo”; después declararon que abstenerse de votar era pecado; pero enseguida hicieron evidente su conservadurismo, al exhortar a los católicos para que no

⁵ *Ibid.*, p. 32.

⁶ *Loc. Cit.*,

⁷ *Ibid.*, p. 33.

votaran por partidos o candidatos que estuvieran a favor del aborto o de la convivencia entre homosexuales.

Comentarios finales

Un tema de reflexión que surgió después de los comicios fue buscar las causas del alto índice de abstencionismo (59%), el nivel más elevado en los últimos 30 años, al que debe sumarse 11.5% de votos anulados. En torno al abstencionismo surgió la preocupación de la clase política del país, que trató de interpretar el mensaje de la ciudadanía, que sin duda quiso manifestar su protesta, desilusión o castigo; una parte significativa del electorado quiso hacer patente su repudio por un proceso marcado por las constantes disputas entre los partidos por el reparto de los cargos de representación popular, lo que entraba en franca contradicción con los intereses de los ciudadanos; asimismo, las campañas empeñadas en vender la imagen de los candidatos como cualquier otra mercancía terminaron por desalentar al electorado.

A la luz de lo aquí revisado, urge una profunda reforma electoral que impida los enormes gastos de los partidos políticos, los largos periodos de campañas y precampañas, así como el uso de recursos sin fiscalización, que permiten la corrupción partidista. La democratización debe llegar también a los medios de comunicación, evitando ser utilizados por un solo partido, que aprovecha sus relaciones de poder con los dos monopolios televisivos. Está pendiente también garantizar el voto libre, no coaccionado ni comprado; evitar el divorcio entre sociedad civil y partidos políticos; asegurar elecciones equitativas, libres, limpias, y confiables; así como partidos políticos que sean ejemplo de honestidad y democracia, cuyas finanzas muestren transparencia, con candidatos y dirigentes electos de manera democrática.

Con su llegada al poder, Vicente Fox tuvo dos alternativas: dismantelar el viejo régimen corporativo, imponiendo castigos a los grandes corruptos que lo sustentaron; o buscar el apoyo del PRI y dar continuidad a su proyecto económico; optó por esto último, respetó los viejos liderazgos y permitió la subsistencia de la antigua clase política; el PRI aprovechó las indecisiones del gobierno para recuperarse; Fox buscó el apoyo del antiguo partido de Estado, y a cambio entregó su valioso capital político, permitiendo con esto el regreso impune del ex Presidente Carlos Salinas. Sin embargo, pese a todo el terreno cedido, Fox se ha encontrado con un PRI reacio en sus negociaciones.

Después de la caída del régimen de partido único que gobernó al país por 70 años, y lograda la alternancia en el poder; una parte significativa de la ciudadanía ha expresado su rechazo a esta forma de transición a la democracia, esperanzada en que el pluralismo político resuelva el estancamiento económico, el desempleo, la corrupción y el deterioro de los servicios públicos.